

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTES	: JORGE ALONSO ECHEVERRY VÁSQUEZ
DEMANDADOS	: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A Y CEMENTOS ARGOS S.A.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-010-2020-00254-01
RADICADO INTERNO	: 027-23
DECISIÓN	: CONFIRMA, MODIFICA PARCIALMENTE Y ORDENA
ACTA NÚMERO	: 051

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a la sociedad Cementos Argos S.A a cancelar a Protección S.A, el valor del título pensional correspondiente al periodo laborado por el demandante al servicio de dicha compañía, sin que haya realizado afiliación a los riegos de invalidez, vejez y muerte.

Se CONDENE a Protección S.A a recibir el título pensional que deberá cancelar la sociedad Cementos Argos S.A; a pagar al demandante la devolución de saldos, incluyendo el valor del título pensional; paga al demandante en forma indexada, las sumas reconocidas al actor, fruto de la reliquidación de la devolución de saldos; al pago de las costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que, nació el 15 de julio de 1947, cumpliendo los 62 años de edad en el año 2009; el actor cotizó a Protección S.A 4 semanas; el 13 de mayo de 2019 solicitó la devolución de saldos por no alcanzar el

requisito de semanas de la pensión de vejez; la accionada Protección S.A el 19 de marzo de 2020 le reconoció la devolución de saldos en la suma de \$26.453.

Expresa que el actor laboró para la sociedad Cementos El Cairo S.A hoy Cementos Argos S.A, desde el 17 de diciembre de 1970 al 30 de abril de 1986, periodo en que el empleador omitió afiliar al demandante para la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte; el actor elevó petición a la sociedad Cementos Argos S.A el 6 de agosto de 2020, a efectos de que procediera a cancelar a Protección S.A el valor del título pensional, por el tiempo laborado. La sociedad Cementos Argos S.A negó el pago del título pensional del demandante a Protección S.A.

RESPUESTA A LA DEMANDADA

La accionada Protección S.A en su contestación de la demanda dice que no es cierto que el actor haya cotizado 4 semanas, según la historia laboral emitida por Protección S.A ha cotizado 1.29 semanas. No le consta que el demandante haya laborado para Cementos Argos S.A; que la sociedad Cementos Argos S.A haya omitido afiliar al demandante; y que el demandante haya solicitado el pago del título pensional, porque no se refieren a hechos relacionados con Protección S.A. acepta los demás hechos de la demanda. Frente a las pretensiones, indica que no va a realizar pronunciamiento por estar dirigidas contra Cementos Argos S.A. y manifiesta que Protección S.A debió ser citado en calidad de tercero y no de demandado. Propuso como excepciones de mérito las de buena fe, compensación y prescripción (expediente digital 06).

En auto del 24 de junio de 2022, se dio por no contestada la demanda por parte de la sociedad Cementos Argos S.A (expediente digital 14)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 26 de enero de 2023, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a CEMENTOS ARGOS S.A. a realizar los trámites administrativos, ante PROTECCIÓN S.A., dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, con la finalidad de que PROTECCIÓN S.A. liquide los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones dentro de los 15 días siguientes al inicio del trámite por el empleador en favor del trabajador Jorge Alonso Echeverri Vásquez, durante los periodos comprendidos entre el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril

de 1986, teniendo en cuenta un salario de \$26.571 conforme al certificado de archivo 15 fl 25. La liquidación se hará conforme la metodología de que trata el Decreto 1887 de 1994. PROTECCIÓN S.A. deberá notificar la liquidación a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. entidad que luego de ello, tendrá 5 días para pagarlo.

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A que una vez recibido a satisfacción el cálculo actuarial pagado por el empleador, en los 10 días siguientes de su recibo, reconozca y pague al Sr. Jorge Alonso Echeverri Vásquez, la devolución de saldos que corresponda. E impuso costas en esa instancia a CEMENTOS ARGOS S.A. y sin costas a cargo de PROTECCIÓN S.A.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte accionante en primer lugar, se aparta de la decisión, que se tome como base salarial para realizar la liquidación, la suma de \$26.571 como consta en la certificación del archivo 15 pagina 25, toda vez que en dicho documento también se encuentran otros factores salariales, certificados por Cementos Argos S.A, en donde se plasma una bonificación semestral de julio 15 días, bonificación semestral diciembre 30 días, bonificación vacacional 15 días, lo anterior, conforme lo establece el art 127 del CST y los Decretos 1513 de 1998 y 1724 de 1996; que al hacer el cálculo del último salario devengado por el actor, considera que como mínimo, el valor para tener en cuenta para la liquidación del cálculo actuarial es un salario actualizado a la fecha, es de \$35.427 y no de \$26.571.

En segundo lugar, solicita que en segunda instancia, a través de la oficina encargada de liquidar obligación de la Rama Judicial, proceda con realizar el cálculo actuarial teniendo en cuenta \$35.427 y las semanas laboradas con Cementos Argos S.A, tomando como fecha de ingreso el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986; lo anterior arroja como mínimo, un valor del cálculo actuarial a favor del demandante de \$226.325.516, valor al que se debe incluir los intereses moratorios y el valor de las costas y agencias en derecho.

Y la apoderada de Cementos Argos S.A solicita la revocatoria de la sentencia en virtud de la irretroactividad de la ley, teniendo como sustento la sentencia C 691 de 2001; sostiene que dentro del ordenamiento jurídico, la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fue a partir del 1º de abril de 1994,

y el actor laboró para Cementos El Nare entre el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986, y para dicha fecha no se encontraba dentro del listado de cobertura del sistema, del territorio en donde se prestó el servicio, lo cual tuvo lugar en la Sierra – Puerto Nare, y solo fue a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 donde surgió la obligación para Cementos el Nare hoy Cementos Argos S.A, de pagar las cotizaciones a la seguridad social.

Resalta la existencia del salvamento de voto de la sentencia 82.838, en donde se indica que no se puede condenar a las empresas en las cuales no había cobertura del Sistema; y remite a la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Medellín, radicado 009-2017-00016-00, donde se indica que en caso de condenarse al pago del cálculo actuarial la empresa, no debe ser condenada al pago de intereses moratorios y sanción por no pago.

Finalmente, solicita se absuelva del pago de las costas procesales, por haber actuado en los parámetros de la buena fe y bajo la ley que constituyó la relación laboral.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Una vez se dio traslado a las partes estas no presentan alegatos de conclusión

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia, en virtud del recurso de apelación, se centra en determinar: i) Si hay lugar a revocar la orden impuesta a Cementos Argos S.A de pagar el cálculo actuarial; ii) En caso de prosperar lo anterior, se deberá determinar si el cálculo actuarial se deberá liquidar con base en un salario de \$35.427, teniendo en cuenta como factores salariales, los conceptos de bonificación semestral de julio y diciembre y bonificación vacacional; iii) Si en segunda instancia se debe liquidar en forma concreta el valor que se debe pagar; iv) Si hay lugar a revocar las costas impuestas a Cementos Argos S.A

Asuntos que se analizarán en el siguiente orden:

- 1. En relación al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por el período comprendido entre el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986**

En primera instancia el juez CONDENÓ a la sociedad Cementos Argos S.A a realizar los trámites administrativos, ante PROTECCIÓN S.A. para que esta liquidara los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, durante el periodo comprendido del 17 de diciembre de 1970 al 30 de abril de 1986, al estar probado en el plenario los extremos laborales.

Decisión que es apelada por Cementos Argos S.A, porque la vigencia de la Ley 100 de 1993 fue a partir del 1º de abril de 1994 y el actor laboró para Cementos el Nare entre el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986, fecha en que no había cobertura del sistema.

Al respecto encuentra la Sala, que en sentencia T 281 de 2020, se hace un recuento de **las diferentes tesis** asumidas por la Corte Constitucional respecto al cálculo actuarial del tiempo laborado con anterioridad al 1º de abril de 1994, en donde se dijo:

“ 5.1. En la Corte Constitucional se han presentado, por lo menos, cuatro posturas, a saber:

Primera tesis. *El empleador no estaba obligado a cotizar antes del llamamiento que hiciera el ISS. (...) En la misma línea, la Corte adujo (ii) que la obligación de aprovisionar recursos para, a futuro, entregarle al ISS el valor de un cálculo actuarial, solo nació con el artículo 33, literal c, de la Ley 100 de 1993, de manera que tal mandato no existía con anterioridad y si se impusiera, vía legislativa, ello infringiría el principio de la irretroactividad de la ley en el tiempo, lo cual “sería necesariamente inconstitucional por atentar contra el principio de seguridad jurídica, postulado básico de un Estado de Derecho” .*

Segunda tesis. *Las empresas, aun cuando no habían sido llamadas por el ISS para cotizar en favor de sus empleados, sí mantenían, por mandato de las leyes 6 de 1945 y 90 de 1946, la obligación de aprovisionar los recursos necesarios para que estos fueran tenidos en cuenta al momento de reconocer la pensión de vejez.*

Esta postura ha sido defendida por diversas Salas de Revisión. Fundamentalmente se sostiene que, en escenarios como el presente, “la interpretación que se encuentra acorde a la Constitución, es que desde la entrada en vigencia del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 se impuso la obligación a los empleadores de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar el aporte previo al sistema de seguro social en el momento en que el Instituto de Seguros Sociales asumiera la obligación” (...).

Tercera tesis. *Si bien no existía obligación legal frente a aprovisionamiento alguno, una aplicación acrítica de la Sentencia C-506 de 2001 puede derivar en una situación altamente injusta que no puede ser aceptada a la luz de la Constitución, como lo es que un trabajador pierda un periodo laborado y por ello no logre acceder a la pensión de vejez. (...)*

Cuarta tesis. *Se ha dicho que la Sentencia C-506 de 2001, declaró exequible la previsión del artículo 33, literal c, de la Ley 100 de 1993 y, con ello, avaló la imposibilidad de que los tiempos de servicio prestados con empleadores capaces de pensionar, cuya relación laboral hubiere terminado antes de la entrada en vigencia de esa norma, fueran computados a efectos de reconocer una pensión de vejez. (...)*

*Sobre esta base, la Sentencia T-665 de 2015 ordenó al empleador efectuar un cálculo actuarial que pagaría luego a Colpensiones, por los aportes dejados de efectuar cuando no había cobertura del Instituto.”
(Negrilla fuera del texto)*

Y finalizó la Corte Constitucional ese recuento jurisprudencial manifestando, que en esa oportunidad se asumiría la tercera tesis acompañada de argumentos dados por la Corte Suprema de Justicia.

Visto lo anterior, y al ser claro que la misma Corte Constitucional no ha guardado una directriz concreta y unánime en su línea jurisprudencial, con la cual se pueda determinar la imposibilidad de condenar a los empleadores que con anterioridad al 1º de abril de 1994 no realizaron aportes al sistema de seguridad social en pensiones, ante la falta de cobertura del ISS, para la Sala, no se puede dejar de lado, que desde la Ley 90 de 1946 en su art. 72, existía la obligación de que los empleadores realizaran **un aprovisionamiento** del dinero necesario para que realizaran los aportes al ISS y este asumiera la obligación pensional, y esta obligación de los empleadores ha sido refrendada por la Corte Constitucional, en sentencias tales como, la T-770 de 2013, en la que expreso “...**es la responsabilidad de los empleadores de sufragar el título o bono pensional** por el número de semanas efectivamente laboradas para una misma empresa, atendiendo **el deber de aprovisionamiento** dispuesto legalmente.”

Y en la sentencia T-396 de 2018 plasmó:

*“...Con fundamento en el marco normativo expuesto, la Corte Constitucional, a través de sus diferentes Salas de Revisión, ha señalado **el deber de los empleadores de aprovisionar** los recursos necesarios para el reconocimiento y pago de las pensiones de sus trabajadores, como se expondrá a continuación. (...)*

*En esa ocasión, la Sala Sexta de Revisión reiteró el precedente constitucional sobre la acumulación de tiempos de servicios prestados y **el deber de aprovisionamiento de los empleados**, establecido en las sentencias T-784 de 2010, T-712 de 2011, T-549 de 2012, T-492 de 2013, T-518 de 2013, T-676 de 2013, T-770 de 2013, T-410 de 2014, T-665 de 2015 y T-714 de 2015, en las que se sostuvo que:*

*(i) **El deber de aprovisionamiento de los empleadores surgió desde 1946**, sin importar la fecha en que entró a funcionar el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme con el artículo 72 de la Ley 90 de 1946. (...)*

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia al analizar el mismo tema que hoy se debate, entre otras, en las sentencias SL 8647 de 2015 y en la sentencia SL 4072 de 2017, manifestó en esta última:

*“...Ahora, en lo concerniente a que solo hasta el 1 de agosto de 1986 - fecha en la que el ISS asumió la cobertura de IVM-, la empresa accionada tuvo a su cargo el reconocimiento pensional, pues este la subrogó en dicha obligación dado que para esa fecha el actor había laborado menos de diez años con la sociedad demandada, es de señalar que **los riesgos pensionales en cabeza del empleador solo cesan con la subrogación a la respectiva entidad de seguridad social**, la que, como se recuerda para el caso del actor, solo tuvo ocurrencia el 1 marzo de 1994. No obstante, **lo cierto es que el tiempo de servicios no cotizados por falta de cobertura del ISS, no puede ser desconocido**, al punto que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto del trabajador, que se traduce en el pago de un cálculo actuarial. (...)*”

Y recientemente, en sentencia SL 673 de 2021 reitera esta posición, retomando apartes de las sentencias SL 9856 y SL 17300 de 2014, en donde se le impone al empleador la carga de asumir los periodos no cotizados en virtud de la falta de cobertura del ISS en virtud del aprovisionamiento planteado en la Ley 90 de 1946. Al respecto retoma de la sentencia SL 9856 de 2014 lo siguiente:

“En efecto, la Corte en la sentencia citada dio por sentado que con la Ley 90 de 1946 se garantizó el mejoramiento integral de los trabajadores a través de una cobertura efectiva de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, promoviendo un beneficio general e indiscriminado de los trabajadores, especialmente, mientras se extendía la cobertura a los contingentes de trabajadores que sistemáticamente fueran llamados a inscripción, reconociendo que el empleador tiene una serie de compromisos, en el periodo en el que no existió cobertura, y para ello señaló:

“... Estima esta Corte que si en cabeza del empleador se encontraba la asunción de las contingencias propias del trabajo, aquella cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, de forma que ese período <en el que aquel tuvo tal responsabilidad, no puede ser obviado o considerarse inane, menos puede imponérsele al trabajador que vea afectado su derecho a la pensión, ya sea porque se desconocieron esos periodos, o porque por virtud del tránsito legislativo ve perturbado su derecho.

Esa responsabilidad no puede entenderse como vacía, u obsoleta, por el contrario se traduce en una serie de obligaciones de quien estaba llamado a otorgar la pensión y

quien si bien se subrogó no puede desconocer los periodos laborados por el trabajador.”

Y en sentencia reciente SL 244 del 8 de febrero de 2023 reitera la Corte, la posición donde el empleador debe asumir el pago de los periodos que no fue afiliado y no se realizó cotizaciones al trabajador. Al respecto señaló:

“Se estimó, que ante la omisión legislativa, no resultaba razonable cargarle las consecuencias a la parte débil de la relación laboral; de suerte que «el patrono, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento pudo haberse liberado de la carga que le correspondía, amén de las obligaciones contractuales existentes entre las partes». Este criterio se ha mantenido invariable y ha sido sostenido, entre otras, en las sentencias CSJ SL14388-2015, CSJ SL2138-2016, CSJ SL18398-2017, CSJ SL361-2018, CSJ SL287-2018, CSJ SL1358-2018, CSJ SL1342-2019 y CSJ SL1356-2019.

(...)

Es claro, entonces, que el empleador está en la obligación de sufragar el valor del cálculo actuarial a la entidad de seguridad social, por aquellos periodos en los que el trabajador le hubiere servido, sin que importe si se había iniciado la cobertura de afiliación, a fin de contribuir con la conformación del capital necesario para el financiamiento de la prestación del trabajador.

En cuanto a los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, la Sala reitera su alcance, bajo el entendido que sí dispusieron una obligación a cargo de los empleadores de realizar la provisión proporcional al tiempo en que el trabajador laboró. Y en el caso de los empleadores respecto de los cuales no empezó a operar la asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte por falta de cobertura del ISS, no los liberó de responsabilidad, pues estos riesgos continuaron a su cargo en vigencia de los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo. (...).”

Con fundamento de la jurisprudencia citada, se concluye entonces, que el empleador demandado tenía la obligación de haber efectuado el pago de dicho dinero al ISS en cumplimiento de la Ley 90 de 1946 una vez iniciara la cobertura, que en este evento tuvo lugar el **1º de abril de 1994**, pero al no haberlo hecho, es responsable del pago del título pensional por el tiempo transcurrido entre el **17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986**, debiendo ser CONFIRMADA la sentencia de primera instancia en este punto.

2. Del salario con que se debe liquidar el cálculo actuarial

En primera instancia se condenó a CEMENTOS ARGOS S.A. a realizar los trámites administrativos, ante PROTECCIÓN S.A., con la finalidad de esta liquidara los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, **teniendo**

en cuenta un salario de \$26.571, conforme lo extrajo del certificado del archivo 15 página 25. Decisión que es apelada por la parte demandante, al considerar que el salario que se debe adoptar es la suma de **\$35.427** acogiendo factores salariales que no se tuvo en cuenta en primera instancia.

Inconformidad que prosperará en esta instancia, teniendo en cuenta que al remitirnos a la respuesta dada por Cementos Argos S.A el 21 de septiembre de 2018 y en certificado laboral (fls. 19 y 20 del expediente digital 02 y fl. 25 del expediente digital 15), se extrae que:

- El salario básico del actor del último año de servicio, siendo la suma de \$21.602 el valor reconocido de abril a noviembre de 1985 y la suma de **\$26.571** percibida desde diciembre de 1985 a abril de 1986
- Aunado a lo anterior, fue certificado por la sociedad demandada, de los factores salariales devengados, que correspondían a: bonificación semestral julio (15 días de salario), bonificación semestral diciembre (30 días de salario) y prima de vacaciones (15 días de salario).

Con base en la prueba reseñada, se evidencia que el Sr. Jorge Alonso Echeverri Vásquez, además del salario básico tenía derecho a dos bonificaciones semestrales y una prima de vacaciones, los cuales constituían factor salarial, lo que implica que no se pueda tener como parámetro para liquidar el cálculo actuarial la suma de \$26.571 por si sola, en vista que con la prueba arrimada es claro que en los meses de julio y diciembre existía un incremento el salario percibido por el actor con ocasión a la prima semestral y otro incremento se presentaba con el pago de la prima de vacaciones.

En consideración a lo expresado, al no existir prueba de los salarios devengados por el actor en los años 1970 a 1984, se hace imposible determinar los factores salariales percibidos por el demandante, lo que da lugar para que en esta instancia se MODIFICARÁ PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, y en su lugar se ORDENARÁ a la sociedad Cementos Argos S.A. a remitir a Protección S.A., información de la totalidad de los conceptos salariales recibidos por el demandante mes a mes, en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986, a efectos de que sea el fondo de pensiones Protección S.A. quien liquide el cálculo actuarial teniendo en cuenta el salario básico más los factores salariales señalados.

Debiéndose advertir, que en caso que el salario básico más los demás factores salariales de un mes, proyecte una suma inferior a la ordenada por el Juez de \$26.571, el valor mínimo a tenerse en cuenta en dicha mensualidad será el ordenado por el Juez (\$26.571), ya que Cementos Argos en ningún momento presentó oposición frente al valor del salario con el cual se ordenó realizar la liquidación.

En lo que respecta a la solicitud, que en segunda instancia se liquide el cálculo actuarial, tampoco se accederá a ella, por falta de prueba para la ejecución del cálculo, y porque, ante la falta de certeza de la fecha en que la entidad realizaría el pago, no es dable a la Sala emitir una condena en concreto. Aunado a lo anterior, en primera instancia y de segunda instancia se determinó la normatividad, extremos laborales y se está plasmando los parámetros del salario que se debe tener en cuenta para liquidar el cálculo actuarial, en consecuencia, se están generando las directrices para que el fondo de pensiones realice el cálculo actuarial al que tiene derecho el accionante.

3. De las costas procesales a cargo de Cementos Argos S.A

Se CONFIRMARÁ la orden impuesta, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, y en este evento, la pretensión de condenar al ex empleador Cementos Argos S.A al pago del cálculo actuarial al fondo de pensiones, salió avante.

Costas en esta instancia:

- En la suma de \$1.160.000 a cargo de Cementos Argos S.A y a favor del demandante, al no prosperar los recursos de apelación presentado.
- Costas en la suma de \$580.000 a cargo de la parte demandante y a favor de Cementos Argos, por prosperar parcialmente el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR las ordenes dada a Cementos Argos y Protección S.A., teniendo a liquidar y pagar el cálculo actuarial, conforme a las razones explicadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICARÁ PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, para en su lugar **ORDENAR** a la sociedad Cementos Argos S.A. a remitir a Protección S.A., información de la totalidad de los conceptos salariales recibidos por el demandante mes a mes, en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1970 y el 30 de abril de 1986, a efectos de que sea el fondo de pensiones Protección S.A. quien liquide el cálculo actuarial teniendo en cuenta el salario básico más los factores salariales señalados..

TERCERO: Costas en costas en esta instancia así:

- En la suma de \$1.160.000 a cargo de Cementos Argos S.A y a favor del demandante, al no prosperar los recursos de apelación presentado.
- En la suma de \$580.000 a cargo de la parte demandante y a favor de Cementos Argos, por prosperar parcialmente el recurso de apelación.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: JORGE ALONSO ECHEVERRY VÁSQUEZ
DEMANDADOS	: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A Y CEMENTOS ARGOS S.A.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-010-2020-00254-01
RADICADO INTERNO	: 027-23
DECISIÓN	: CONFIRMA, MODIFICA PARCIALMENTE Y ORDENA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 21 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 21 de marzo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO